CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Terminamos el presente Informe sistematizando las principales conclusiones sobre la valoración de la política de internacionalización empresarial (PIE) impulsada desde 2014 por el Gobierno Vasco desde la perspectiva de la coherencia de políticas para el desarrollo (CdP), tras el recorrido integral realizado sobre agentes y estructuras, documentos estratégicos e instrumentos principales.

A su vez plantearemos, desde un punto de vista propositivo, una serie de recomendaciones para ahondar en una PIE donde primara el enfoque de desarrollo humano sostenible –tal y como explícitamente plantea el propio ejecutivo vasco en su *Marco CdP*–, sin olvidar el hecho de que la propia PIE en sí misma está en cuestión como herramienta en favor del bien común y la sostenibilidad.

Para todo ello, nos valdremos del marco de referencia construido en el primer capítulo, en base a los 18 criterios que hemos definido como claves para entender la PIE desde la CdP. Recordemos que estos criterios se articulan en torno a 5 ideas-fuerza:

- *Bienestar–Centralidad del ser humano* (objetivos, principios y compromisos vinculados al bien común, los derechos humanos y la sostenibilidad; agenda, estructura y sistema específico de evaluación participativa de impactos).
- *Sostenibilidad* (cláusulas en favor de la sostenibilidad y la transición energética; estudios de impacto ambiental).
- *Capacidades–empoderamiento* (fortalecimiento mutuo e intercambio horizontal de capacidades entre el lugar de origen y destino; coherencia con las prioridades estratégicas del territorio de destino; impacto positivo en el tejido productivo local y en los servicios públicos locales; fórmulas de tecnología apropiada y transferencia tecnológica; formación local; crecimiento neto del empleo digno y de los derechos de libertad sindical, negociación colectiva y huelga; inversión estable, sólida, en el largo plazo, y que prima la reinversión sobre la repatriación de beneficios).
- *Participación* (iniciativas empresariales donde prima el trabajo y la democracia en la toma de decisiones; garantía de que los planes-país y las iniciativas que se impulsen –especialmente las misiones de acción exterior– incorporen elementos de agenda vinculados al desarrollo humano y la sostenibilidad, así como la participación activa de un número suficiente y representativo de agentes sociales y sindicales; estructura con capacidades políticas suficientes; de carácter inclusivo, en la que participen activamente un número suficiente y representativo de agentes sociales y sindicales).
- *Equidad* (igualdad entre hombres y mujeres en el empleo y condiciones laborales; diversidad de etnia/razas en el empleo y las condiciones laborales; personas discapacitadas en el empleo y las condiciones laborales).

Respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, tiene una cierta presencia en las normativas que regulan los programas subvencionales. Aun así, la mayoría de incorporaciones normativas a este respecto derivan de la aprobación a nivel estatal de la *Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres*. Asimismo, no hay una perspectiva específica y diferenciada en torno a la promoción de la equidad de género en destino. Así mismo, no existen cláusulas de promoción de la diversidad de etnias/razas, ni que incorporen la perspectiva de personas discapacitadas.

Por último, y como ya hemos señalado, no hay establecida estructura ni sistema de seguimiento alguno para evaluar el impacto de las iniciativas impulsadas en términos de desarrollo humano sostenible.

En definitiva, los valores y objetivos que se definían como estratégicos y hegemónicos en el capítulo anterior (competitividad y rentabilidad, captura de mercados, y seguridad en las inversiones por encima de otras consideraciones) se trasladan de manera coherente –aunque en absoluto con el desarrollo humano sostenible– a un marco de instrumentos en el que únicamente dichos valores y objetivos se explicitan como ejes de la PIE impulsada por el Gobierno Vasco.

Así, todas las consideraciones vinculadas al DHS (bienestar de las mayorías, fortalecimiento mutuo de capacidades, sostenibilidad, participación y equidad) están completamente ausentes en las líneas subvencionales y de capital humano–salvo mínimas referencias a la controvertida RSC en algún instrumento, o la aplicación de la *Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres*, aunque nunca para los países en los que se opera–. A su vez, la diplomacia económica se guía estrictamente por criterios de ganancia y competitividad, a partir de una alianza público-privada con las Cámaras de Comercio, de la que se excluye a los movimientos sociales y a cualquier eje de DHS. El resultado final explicita así que la PIE se decanta por la competitividad pura frente al marco de derechos humanos y al desarrollo humano sostenible, en contradicción con lo afirmado por el Gobierno Vasco en su *Marco Cdp*.

Con este apartado damos por finalizado el análisis de los distintos elementos que componen la PIE del Gobierno Vasco, en el que hemos abordado el organigrama institucional encargado de su diseño y despliegue, la documentación que recoge la planificación estratégica de esta PIE, y los instrumentos concretos en que esta se materializa, a saber, líneas subvencionales, diplomacia económica y fortalecimiento de capacidades en origen. Pasaremos a continuación a volcar todo este acumulado en la sistematización de conclusiones y la propuesta de recomendaciones.

5.1. Conclusiones

Antes de comenzar con la exposición de las principales conclusiones, es pertinente recordar alguno de los elementos que ya expusimos en la Introducción de este Informe a la hora de acotar el objeto de estudio:

- El análisis de la PIE impulsada por el Gobierno Vasco se circunscribe a un *marco competencial limitado* –que carece de responsabilidad y agencia sobre la política exterior y comercio internacional–; a un *espacio geográfico determinado* –la Comunidad Autónoma Vasca–; y a un *tejido empresarial específico* –en el que abunda la mediana y pequeña empresa–. Esto provoca que cualquier análisis comparativo de las conclusiones de la presente investigación respecto a otras realidades con marcos competenciales, geográficos y tejidos económicos diferentes, debe ser tomado con relativa prudencia.
- El Informe se centra exclusivamente en dos de los tres principales ámbitos de la internacionalización empresarial (exportación de bienes y servicios, por un lado, implantación exterior, por el otro), dejando para futuras investigaciones la línea de promoción en la atracción de inversiones extranjeras. A su vez, se ha focalizado en la *política pública* en sí misma, esto es, en las estructuras, el marco teórico-político y los instrumentos en base a los cuales se desarrolla la PIE impulsada por el Gobierno Vasco. De esta manera, no evaluamos impactos de dicha política –que deberían ser objeto de informes complementarios en base a sistemas sólidos de rendición de cuentas, que a día de hoy no existen–, sino la definición de la misma, *quién*, sobre *qué* y *cómo* está construida.

Por lo tanto, no valoramos el resultado final de las ayudas concedidas e iniciativas desarrolladas, sino si la configuración de la política pública en la que estas se basan contempla o no la CdP. En todo caso, podemos también afirmar, sin entrar en contradicción, que si la entidad pública al mando de la política –defensora del interés general– no garantizara la defensa de los derechos humanos, el bien común y la sostenibilidad, es difícil que lo hagan entidades privadas cuya identidad se basa en la obtención del máximo beneficio. De esta manera, y aunque no podamos evaluar directamente las múltiples iniciativas impulsadas, el análisis integral de la PIE nos arrojará luz indirecta sobre cómo interpretar el impacto final de estas.

Además de tener en cuenta ambas cuestiones, también debemos recordar los principales hitos de la apuesta política realizada por el Gobierno vasco en favor de la coherencia de políticas para el desarrollo explicitada en el *Marco CdP*, aprobado en 2016. Según este documento referencial, la Coherencia de Políticas para el Desarrollo debe:

- Concebirse como la integración de la perspectiva del *desarrollo humano* y la *sostenibilidad* en el *diseño, puesta en marcha y evaluación de las políticas públicas* en los distintos niveles, así como la *coordinación y complementariedad* entre las mismas;

- Ser una *referencia básica* para la acción de gobierno, tanto en lo que afecta a las estrategias de desarrollo internas como en lo que se refiere a la *acción exterior* o a la relación entre ambos asuntos;
- Hacer compatibles los procesos de desarrollo y la *satisfacción de las necesidades humanas en unos y otros países*. Desde el respeto hacia las formas de organización económica y social de cada uno, se trata de que las decisiones que se tomen en un territorio no lesionen las posibilidades de otros de avanzar hacia mayores cotas de bienestar;
- Promover una noción de *competitividad basada en la defensa de la eficiencia social y ecológica como señas de identidad* del modelo que se desea promocionar, más que como una disputa de mercados sustentada en ocasiones en la merma de derechos, la precariedad e inseguridad de las personas, o la destrucción de recursos naturales.

Partiendo de este conjunto de premisas, extraemos las siguientes conclusiones generales, que después aterrizaremos de manera sistemática y específica a las ideas-fuerza del desarrollo humano sostenible –y a los 18 criterios en la que estas se concretan para el análisis de la PIE–:

- La política de internacionalización empresarial impulsada por el Gobierno Vasco sigue un *enfoque* (desde la definición del marco teórico hasta la concreción de criterios para el desarrollo de ayudas e iniciativas, pasando por la concreción de agentes y estructuras prioritarias) *exclusivamente basado en la meta de aumentar la competitividad y rentabilidad* para las empresas vascas, la captura de nuevos mercados y, en última instancia, la generación de empleo en la Comunidad Autónoma Vasca. En sentido contrario, afirmamos que la PIE del Gobierno Vasco es *ajena al enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo*, de una manera integral y generalizada, esto es, abarcando todas las fases y ámbitos de definición de la política pública. En este sentido:
 - Los principales documentos estratégicos en los que se basa la PIE no se sustentan en valores y objetivos vinculados al desarrollo humano sostenible. Se constatan menciones puntuales en la *Estrategia Basque Country* que en ningún caso afectan a la identidad y metas prioritarias definidas en el documento. También el *Plan de Acción Exterior* incluye un objetivo estratégico vinculado a la *construcción de un mundo más justo y equilibrado*, pero que no se materializa en líneas de actuación concretas. Este tipo de menciones desaparecen en el centro neurálgico de la PIE, el *Plan de Internacionalización Empresarial 2014-2016*. Este texto concreta y explicita la apuesta por los principios rectores antes citados de competitividad pura, rentabilidad, captura de mercados y generación de empleo en Euskadi, sin contrapeso de ningún tipo.
 - Los requisitos y criterios de baremación para participar en los diferentes instrumentos –eje central de toda política pública, ya que traslada a la práctica el marco teórico-político– se sostienen únicamente sobre elementos técnico-empresariales, obviando por completo aspectos sociales, laborales,

ecológicos o vinculados al fortalecimiento de las capacidades de los países donde se opera. En lo que se refiere a las líneas subvencionales, únicamente dos convocatorias hacen una vaga referencia a la responsabilidad social corporativa (RSC) como criterio a baremar, pero cuyo carácter es testimonial y residual, no superando en ningún caso el 3 % de la puntuación total. Asimismo, los escasos criterios adicionales que podemos encontrar (especialmente en materia de equidad de género, u otros como la exclusión de empresas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armas), derivan en gran parte de legislaciones preexistentes, como la *Ley 4/2005 de 18 de febrero para la igualdad de Mujeres y Hombres*, la *Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres* o la *Ley 14/2007, de 28 de diciembre, de Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos*, y resultan claramente insuficientes frente al peso que adquieren los factores técnico-empresariales. Respecto a la diplomacia económica, el conjunto de criterios y de patrones de funcionamiento se inserta en dicha hegemonía técnico-empresarial, sin referencia siquiera retórica a otros valores. Así, resulta ilustrativo que el Plan-país México se refiera exclusivamente a la situación de los costes salariales en los distintos estados mexicanos priorizados en el apartado de *costes industriales*, así como la consideración negativa que se hace de *regulaciones laborales restrictivas* o *regulaciones impositivas poco eficientes*. Las distintas herramientas destinadas al fortalecimiento de capacidades en origen están asimismo ampliamente dominadas por esta perspectiva técnico-empresarial, tanto a nivel de orientación general como de requisitos y contenidos formativos.

- La estructura del conjunto de la PIE se asienta sobre la hegemonía del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad (DDEC), cuya misión es la de impulsar el desarrollo económico y la competitividad de las empresas vascas, objetivo que se traslada absolutamente a la identidad de la PIE. El papel de Acción Exterior fundamentalmente complementa el definido por el DDEC a través de la diplomacia económica-corporativa. Además, la política pública se sostiene sobre una alianza público-privada que muestra la colusión de intereses entre Gobierno Vasco y Cámaras de Comercio, pero que en sentido contrario excluye a movimientos sociales y sindicales. Únicamente en el Consejo Vasco de Acción Exterior –de reciente creación y con escaso peso específico– hay participación social, aunque limitada a ONGD.
- La política de internacionalización empresarial impulsada por el Gobierno Vasco es incoherente con el *Marco de referencia para la Coherencia de Políticas para el Desarrollo en el País Vasco* en sus cuatro hitos fundamentales. En este sentido, y en primer lugar, en ningún caso puede considerarse que asume el desarrollo humano y la sostenibilidad como referencias del diseño, ejecución y evaluación de la PIE, posicionando en sentido contrario la competitividad y la rentabilidad de las empresas vascas como eje central. En segundo término, no es una referencia para el conjunto de su acción exterior, ya que la PIE es, junto a la cooperación internacional, la más importante política internacional. De esta manera, la ausencia

de la CdP en este ámbito muestra vías e identidades divergentes para las dos principales políticas exteriores, lógica reforzada por la relativa subalternidad que la cooperación al desarrollo tiene en el seno de la *Estrategia Basque Country 2020*. Tercero, es completamente ajena al interés por la satisfacción de necesidades en otros países en los que se opera, criterios que no aparecen ni en documentos estratégicos ni criterios de baremación de los instrumentos –ni por supuesto en un sistema de evaluación inexistente–. Por último, no apuesta por una competitividad desde la eficiencia social y ecológica, sino que posiciona un concepto de competitividad como disputa de mercados, a partir de una dimensión puramente empresarial.

- En coherencia con las dos conclusiones anteriores, y en relación a nuestro marco de referencia, la política de internacionalización empresarial impulsada por el Gobierno Vasco no llega al mínimo de cumplimiento en ninguno de los 18 criterios priorizados para valorar el grado de coherencia de políticas con la que cuenta la PIE. En este sentido, se podría afirmar que la PIE no toma en consideración, en el conjunto de su definición e implementación, al enfoque de desarrollo humano sostenible, que quedaría a expensas de la voluntad de cada entidad subvencionada y/o participante en convocatorias e iniciativas. Así, parece complejo que una entidad privada con ánimo de lucro apueste por el DHS sin una regulación pública, máxime en un contexto marcado, como vimos en el primer capítulo, por la hegemonía de la *lex mercatoria* y la simetría normativa en detrimento de los derechos humanos. Este enfoque queda plasmado en los criterios de selección de destinos de internacionalización señalados por las entidades empresariales entrevistadas.

A partir de estas tres conclusiones generales, concretamos una serie de conclusiones específicas, en función de las ideas-fuerza y los 18 criterios de nuestro marco de referencia:

- *Bienestar/centralidad del ser humano*: El conjunto de la PIE impulsada por el Gobierno Vasco es coherente con la apuesta por la competitividad y la rentabilidad empresarial como valores fuertes, mientras que el bien común, el bienestar, los derechos humanos y la sostenibilidad no ocupan espacio alguno, desde el marco teórico a la definición de los instrumentos (*criterio 1*). Además, no se ha generado estructura ni sistema alguno de evaluación que al menos pudiera evaluar y rendir cuentas sobre el impacto de las iniciativas puestas en marcha, elemento estratégico para valorar la PIE en su conjunto (*criterio 2*).
- *Sostenibilidad*: Pese al gravísimo contexto climático y energético, los objetivos, principios y criterios sobre los que se asienta la PIE son completamente ajenos al ámbito ecológico y a la necesidad perentoria de avanzar en una transición energética –máxime en un territorio tan dependiente del exterior y de los fósiles como Euskadi– (*criterio 3*). En este sentido, no se solicita a ninguna iniciativa contar previamente, o realizar una vez concedida la ayuda, un estudio de impacto ambiental (*criterio 4*).

- *Capacidades/empoderamiento*: Los objetivos de la PIE impulsada por el Gobierno Vasco se limitan estrictamente al ámbito vasco, en donde en función de la captura de nuevos mercados exteriores se pretende aumentar el empleo en la Comunidad Autónoma Vasca –aunque sin compromisos explícitos ni condiciones sobre la calidad de dicho empleo–. En este sentido, la lógica de fortalecimiento mutuo de capacidades, incluso la política de no hacer daño –*do no harm*– está completamente ausente (*criterio 5*), y por tanto, la inserción de las iniciativas en las prioridades políticas del lugar de destino de las mismas (*criterio 6*). Derivado de ello, no hay objetivo, meta, condición o criterio de análisis que incida en la adecuación de las iniciativas al tejido productivo local (*criterio 7*), a sus necesidades tecnológicas y formativas (*criterios 8 y 9*), así como al crecimiento digno del empleo local en base al marco laboral internacional (*criterio 10*). Por último, no hay condición alguna para garantizar una inversión estable y en el largo plazo, que prime la reinversión a la repatriación de beneficios (*criterio 11*). Destacamos así la nula relevancia del intercambio horizontal entre territorios en la PIE del ejecutivo vasco, centrada en el acceso a nuevos mercados para las empresas vascas, independientemente de cómo y en base a qué lo hagan.
- *Participación*: La participación en la PIE se circunscribe a la alianza público-privada entre Gobierno Vasco y Cámaras de Comercio, quienes juegan un papel muy activo en la diplomacia económico-corporativa, en base a objetivos compartidos vinculados a la competitividad y rentabilidad. En este sentido, no se generan lógicas de discriminación positiva para entidades de mayor sustrato democrático como cooperativas y entidades de la economía social y solidaria (*criterio 12*), ni se cuenta con la participación activa de un marco más amplio y diverso de agentes sociales en las iniciativas en el exterior (*criterio 13*). Respecto a las estructuras de coordinación, seguimiento y evaluación, estas se fundamentan en la hegemonía del DDEC, carecen de responsabilidades y capacidades suficientes para desarrollar su labor, y sufren una infra-representación de agentes sociales y sindicales (*criterios 14 y 15*).
- *Equidad*: En coherencia con la ausencia de criterios sociales, laborales y ecológicos ya esgrimidos –salvo la referencia puntual y residual a la RSC–, la PIE impulsada por el Gobierno Vasco, pese a recoger de manera limitada determinados criterios de equidad de género, no hace referencia expresa alguna a la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los países de destino (*criterio 16*), así como a políticas de discapacidad y no discriminación racial (*criterios 17 y 18*), cuestiones de relevancia en muchos de los países considerados prioritarios.

5.2. Recomendaciones

Antes de enumerar y explicar las recomendaciones para avanzar en una PIE basada en la coherencia de políticas para el desarrollo humano y la sostenibilidad, recordamos las vinculadas directamente a las limitaciones del marco del presente Informe, y que pudieran ser acciones estratégicas para una mejor comprensión del conjunto de la PIE vasca. Así, proponemos:

- Ampliar la investigación al ámbito de *atracción de inversiones extranjeras*, para así completar el conjunto de las dimensiones fundamentales de la PIE;
- Ampliar la investigación a las *Diputaciones Forales*, que precisamente desarrollan una labor muy activa en la promoción económica y atracción de inversiones extranjeras;
- Ampliar la investigación a los *impactos*, ahondando así en el análisis de los resultados finales de las iniciativas desarrolladas.

Respecto a las recomendaciones para la PIE impulsada por el Gobierno Vasco, estas se inscriben en el marco competencial, geográfico y empresarial de la Comunidad Autónoma Vasca. Tomando esto como premisa, proponemos:

- *Reformular la identidad de la PIE impulsada por el Gobierno Vasco* para revertir la hegemonía absoluta actual del enfoque de competitividad y rentabilidad empresarial –circunscrito estrictamente al ámbito vasco– en favor del desarrollo humano sostenible. Solo a partir del posicionamiento de este enfoque como referencia para la definición de principios, objetivos, criterios e iniciativas prioritarias, es posible avanzar en una lógica CdP. Para ello, planteamos:
 - La necesidad de asumir al menos los *18 criterios que vinculan CdP e internacionalización empresarial* como referencia normativa del conjunto de la PIE, desde el marco teórico de los documentos estratégicos hasta la definición de los instrumentos;
 - La necesidad de asumir el *marco internacional de derechos humanos* como referencia jurídica y legal para el conjunto de la PIE, como contrapeso a la asimetría existente en la actualidad entre *lex mercatoria* y los derechos de los seres humanos y la naturaleza, y dado el carácter de obligado cumplimiento de una gran parte de este cuerpo jurídico;
 - La necesidad de *eliminar toda referencia opuesta al desarrollo humano sostenible y al marco internacional de derechos humanos*, como los casos en los que se identifican como ámbitos geográficos estratégicos/prioritarios países no firmantes de convenios internacionales, o la explícita caracterización de normativas laborales y fiscales como debilidad, es decir, como factores a valorar negativamente en el análisis de un determinado destino para las empresas vascas –tal y como aparece en el Plan México–.
- *Crear un Centro Vasco de Empresas y Derechos Humanos* que, en consonancia con la propuesta aprobada en el parlamento catalán en 2016⁵³ (ODHE, 2016), tenga la misión de analizar, rendir cuentas y evaluar el conjunto de la PIE vasca, así como de dar seguimiento a la actividad exterior de las empresas vascas. En

53 Para un análisis más exhaustivo de la propuesta de Centro de Evaluación de Impacto de Empresas Catalanas en el Exterior, consultar en la Federación de Organizaciones para la Justicia Global (2016).

este sentido, las delegaciones del SPRI deberían tener la obligación de complementar esta función del Centro, a través de informes e inspecciones a partir del desarrollo humano sostenible y el marco internacional de derechos humanos, realizados en colaboración con agentes sociales y sindicales locales.

- *Ampliar de manera decidida el marco de agentes sociales* que participan activamente en las diferentes estructuras e iniciativas de la PIE, como vía para revertir la actual asimetría respecto a las empresas y las Cámaras de Comercio, con las que hay una colusión de intereses plasmada en una alianza público-privada que cuenta con un convenio específico. En este sentido, se plantea la necesidad de incluir a sindicatos, ONGD, movimientos sociales y entidades de la economía social y solidaria en estructuras de coordinación, seguimiento y evaluación –como el Consejo Asesor de Acción Exterior o el propuesto Centro Vasco de Empresas y Derechos Humanos–, así como su participación obligatoria en toda misión vinculada a la diplomacia exterior.
- *Fortalecer el peso político de Acción Exterior del Gobierno Vasco* en la definición y dinamización de la PIE como estructura de coordinación del conjunto de la política exterior, de manera que cuente con la capacidad suficiente para incidir en favor del enfoque CdP en toda iniciativa fuera de la Comunidad Autónoma Vasca –en detrimento del DDEC, cuya misión se vincula de manera nítida a una perspectiva de competitividad pura–. En este sentido, es estratégico dotar de contenido, capacidad política y peso presupuestario al *Consejo Asesor de Acción Exterior* como referencia en la fiscalización, seguimiento y evaluación de la PIE.
- *Establecer una serie de criterios preceptivos* –excluyentes, por tanto, para recibir ayuda o participar en iniciativa alguna– basados en el desarrollo humano sostenible y en el marco internacional de los derechos humanos:
 - *La exclusión de aquellas empresas vinculadas a crímenes internacionales tipificados en el Convenio de Roma;*
 - *La exigencia de que toda iniciativa plantee ex ante de la concesión de la ayuda –o al menos antes de comenzar su ejecución– un estudio de impacto ambiental;*
 - *La exigencia de garantizar que la iniciativa en cuestión es coherente con las prioridades estratégicas del territorio de destino, siempre en la medida en que estas prioridades se adecuan a un enfoque de desarrollo humano y sostenibilidad ;*
 - *La exigencia de garantizar que la iniciativa cuenta con una estrategia con retorno económico y social para ambos territorios implicados (bienestar, tejido social, tecnología, empleo, etc.) y de eficiencia integral del gasto público, que establece la obligatoriedad de no financiar ninguna actividad que, como consecuencia de sus impactos negativos, suponga la necesidad de asumir otro tipo de costes posteriormente;*

- La exigencia de garantizar el *cumplimiento integral del marco laboral internacional*, independientemente de si las legislaciones nacionales se sitúan por debajo en términos de protección de los y las trabajadoras. En ese sentido, se excluirá toda iniciativa en países que no hayan firmado los convenios laborales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT);
 - La exigencia de *medidas de protección y corresponsabilidad laboral*, mediante propuesta técnica con indicación concreta de medidas como cheque servicio o acceso a recursos sociocomunitarios que faciliten la atención de menores o personas dependientes; mejoras sobre la reducción de jornada, excedencias, licencias o permisos de paternidad o maternidad; la flexibilización, adaptación o reasignación de servicios y horarios en función de las necesidades de conciliación; u otras similares. Este criterio debe ser extensivo a los centros de trabajo de origen y destino en los casos de implantación permanente en un tercer país;
 - La exigencia de garantizar la *no discriminación por razones de sexo, género, raza/etnia o diversidad funcional* en las iniciativas impulsadas, tanto en la propuesta como en el desarrollo posterior de la misma;
 - La exigencia de que las misiones diplomáticas cuenten con una *amplia participación social y sindical vasca*, además de una agenda que incluya actividades junto a agentes sindicales y sociales locales;
 - La exigencia de hacer pública, en los países en los que las empresas vascas llevan a cabo sus prácticas comerciales, productivas y financieras, la *identificación de filiales, proveedoras, subcontratistas y la forma jurídica de participación en otras empresas o entidades con personalidad jurídica*;
 - La exclusión directa de *empresas vascas con cuentas en paraísos fiscales*;
 - La obligación de encontrarse al *corriente de pago de sus obligaciones fiscales en el país de destino* de la/s actividad/es a apoyar por parte del Gobierno Vasco.
- *Transformar los criterios de baremación de las convocatorias de ayudas* para que los criterios sociales, ecológicos, laborales, culturales y de equidad de género alcancen al menos un 40 % del total de la puntuación –siempre a partir del cumplimiento de los criterios preceptivos establecidos en la recomendación 5–, junto con los criterios técnico-empresariales. En este sentido, destacamos la relevancia de baremar en origen, y especialmente, en destino:
 - La apuesta por la sostenibilidad y la transición energética;
 - Objetivos y estrategias para el fortalecimiento de capacidades en destino y origen en términos de bienestar y desempeño económico;

- El grado y adecuación de la transferencia tecnológica;
- La relevancia de la formación en destino y el mutuo aprendizaje;
- El grado de protección laboral del empleo generado;
- El compromiso con una inversión estable y a largo plazo que prime la reinversión;
- El énfasis en fortalecer fórmulas diversas de economía social y solidaria;
- Los indicadores y metas concretas de empleo que reviertan las asimetrías de sexo, género, raza/etnia y diversidad funcional.

En definitiva, concluimos afirmando que el margen de mejora de la PIE impulsada por el Gobierno Vasco es amplio, ya que todo está por hacer. En este sentido, nuestras recomendaciones se centran en transformar en profundidad los parámetros actualmente vigentes – más centrados en la competitividad –, para posicionar otros alternativos en base al desarrollo humano sostenible y al marco internacional de derechos humanos.

De esta manera, proponemos una nueva estructura que rompa el estrecho marco de la alianza público-privada con las Cámaras de Comercio, en favor de una mirada más inclusiva con la diversidad de agentes sociales, tanto en origen como en destino; que prime la coordinación de la acción exterior desde miradas más allá de la competitividad; y que genere una nueva estructura de seguimiento y evaluación que garantice la primacía de la CdP fiscalizando la acción empresarial vasca en el exterior, tanto la que participa de la PIE como la que no.

Además, se plantea una estrategia basada en instrumentos que de manera preceptiva tengan que cumplir una serie de requisitos sociales, ecológicos, laborales mínimos y de equidad de género –a los que se daría estricto seguimiento–, estableciendo estos a su vez como valores para baremar las diferentes iniciativas, junto a la carpeta más técnica y empresarial.

Esta es, en nuestra opinión, la senda que debería seguir una PIE que realmente apueste por la CdP. No obstante, y como no hemos dejado de repetir a lo largo del Informe, las propuestas realizadas no entran en contradicción con el cuestionamiento general de la PIE como posible estrategia de desarrollo humano sostenible, dada su adscripción a la competitividad como sustrato fundamental. En todo caso, si esta hoja de ruta planteada se muestra viable o no, será un insumo fundamental para avanzar en el debate sobre la naturaleza y capacidad transformadora de la PIE.